
Honoré D. BEUGRÉ, *Le droit canonique. Notions, sources et dispositions générales*, Éditions UCAO, Abidjan 2013, 277 pp., ISBN 9782915693553; *Le droit canonique. Personnes, actes, pouvoir et offices*, Éditions UCAO, Abidjan 2016, 365 pp., ISBN 9782915693676

El abbé Honoré D. Beugré es oriundo de la archidiócesis de Gagnoa, en Costa de Marfil. Titular de un doctorado en Derecho canónico por la Pontificia Universidad Lateranense, es en la actualidad Director del Instituto Superior de Derecho canónico de la Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, con sede en Abidján. Este Instituto es agregado a la Universidad Pontificia Urbaniana, en Roma, y a pesar de contar con pocos años de existencia, es dinámico y ha conseguido tener, por así decirlo, un reconocimiento oficial en la *Revue de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest*.

Como señala el profesor Natale Loda, en el prefacio al primer libro del profesor Beugré, el estudio del Derecho canónico no ha de entenderse como el aprendizaje de una técnica, sino más bien como una experiencia vivencial de la fe en el servicio eclesial diario que contribuye a la caridad en la comunión para la salvación de las almas. Aparece entonces la finalidad pastoral del estudio del Derecho canónico, cooperando cada uno de los fieles, según su papel y lugar en la Iglesia, «en el caminar de la Iglesia particular en la que está llamado a trabajar». Destaca el profesor Loda como el autor ha conseguido dar una unidad al plan antropológico cristiano, dentro del cual las experiencias concretas de la vida humana «se leen buscando la verdad de Dios a través del don de la justicia».

Con este libro, el P. Beugré se propone contestar al interrogante *¿Por qué el derecho en la Iglesia?* Para ello, el capítulo primero se ciñe a «la especificidad del Derecho canónico» (pp. 15-37). Al explicar que el derecho es una ciencia jurídica dentro de la Iglesia, especifica que se trata de una legislación de derecho divino, natural y humano, y una ciencia al servicio de la fe y de la caridad.

Dedica el capítulo II a una breve historia del Derecho canónico y a sus fuentes (pp. 39-52). Sigue en el capítulo III una presentación esquemática del *Corpus iuris canonici: el Código de 1983* (pp. 53-72). No sin una brizna de humor, el autor concluye que no se trata tanto de amar el derecho en general y el derecho canónico en particular, como de conocerlo y de llegar a ser competente en una materia que se impone como un instrumento indispensable para el servicio de la Iglesia, para ejercer su ministerio o su vocación bautismal.

Con el capítulo IV, entramos en el estudio de las *Disposiciones generales del Código, empezando por “las leyes eclesiásticas”* (pp. 73-122), con los cann. 7-22 que dan una formulación sucinta de los aspectos definicionales y técnicos de estas leyes, conforme a la legislación vigente, sin dejar de estar vinculadas a la tradición doctrinal y jurídico-canónica de la Iglesia. Dicha tradición permite descubrir la significación, las características y los aspectos técnicos de las leyes en la legislación de la Iglesia. La consultación de otras fuentes del Derecho canónico se impone para ahondar en el conocimiento de las leyes eclesiásticas.

Las reglas comunes a los actos administrativos particulares (cann. 35-47) es materia del cap. V (pp. 123-140). Al poner estos instrumentos jurídicos a disposición de quienes ejercen la *potestas* ejecutiva, el legislador eclesiástico pone de relieve que el ejercicio del poder en la Iglesia no se ciñe al bien común sino que atañe también y principalmente a las situaciones y casos concretos particulares. Para dar una respuesta eficaz a dichas situaciones particulares es preciso conocer las reglas comunes que rigen los actos administrativos particulares, con el fin de que su uso promueve el bien común y el bien particular en la Iglesia, Pueblo de Dios.

Los decretos y preceptos particulares (cann. 48-58) son objeto del capítulo siguiente (pp. 141-155). Ambos actos administrativos particulares, el decreto y el precepto, están sometidos al principio de legalidad. Esta dependencia se expresa con la fórmula *secundum iuris* para el decreto singular, y la matización *ad legis observationem urgendam* para el precepto singular.

El cap. VII presenta *Los rescriptos* (pp. 157-178) en tres momentos: noción de rescripto, estructura y distinciones de rescriptos, disposiciones relativas al rescripto. Se trata aquí de los cánones 59-75. El rescripto es un acto administrativo con el que un superior jerárquico responde a una petición.

Sigue la presentación de *Las dispensas* (pp. 179-200), o sea de los cánones 76-93. La dispensa es un acto administrativo de gran importancia en el ejercicio del poder de gobierno. Comparte las reglas comunes a todos los actos administrativos, pero sigue también unas reglas específicas. Se impone por tanto conocerlas bien para la validez de dichos actos.

En el cap. IX el P. Beugré procede al examen de *Los estatutos y reglamentos internos* (cann. 94-95) (pp. 201-209). Hace notar que el Concilio Vaticano II ha llevado a los laicos a tomar conciencia de que tienen el derecho de asociarse. El marco asociativo del Código exige redactar estatutos y reglamentos internos, que están sometidos al principio de legalidad y aparecen como expresión de la capacidad de iniciativa y asociación de los fieles cristianos.

Los anexos (pp. 211-260) son la transcripción del conjunto de los cánones sobre las normas del Libro I del Código latino. En la conclusión (pp. 261-263), el profesor Beugré insiste en que el conocimiento del derecho de la Iglesia posibilita volver a leerlo a la luz de las orientaciones del Concilio Vaticano II y de los nuevos planteamientos actuales, y contribuye a la credibilidad del compromiso misional de la entera Iglesia y al testimonio de los laicos cuya vocación específica es perfeccionar el orden temporal.

En su segunda obra, *Le droit canonique. Personnes, actes, pouvoir et offices*, el profesor Beugré prosigue el estudio de las normas generales, y trata de los cánones de los títulos I y II del Libro I del CIC 1983 que no abordó en su primer manual.

La primera parte, *El campo de aplicación del Código de Derecho canónico*, empieza por evocar la cuestión de la naturaleza jurídica y teológica del Derecho canónico, con las respuestas presentadas por tres escuelas: la ciencia canónica es una disciplina jurídica con un método jurídico (Carl Gerold Fürst, Javier Hervada); una disciplina teológica con un método jurídico (Klaus Mörsdorf, Winfried Aymans); una disciplina teológica con un método teológico (Eugenio Corecco). Si bien el magisterio no ha tomado posición en este debate, parece que el decreto *Novo Codice* de 2002, de la Congregación para la educación católica, abogue a favor de la concepción teológica de la ciencia canónica. Con todo, escribe el abbé Beugré, «el derecho canónico asocia método jurídico y método teológico para llegar a una ciencia jurídica *sui generis*. De hecho, los elementos teológicos y la doctrina conciliar y eclesiológica se entienden en un lenguaje y un estilo propio de la ciencia canónica, la cual, haciéndoles concisos y precisiones, les aplica el rigor del método jurídico». No hay que olvidar que el Derecho canónico es «antes de nada una interpretación del misterio eclesial al lado de las Sagradas Escrituras, de la Tradición y de la teología». Con ello, el autor llega a la conclusión de que el Derecho canónico «es una ciencia jurídica que utiliza métodos teológicos y una disciplina teológica que utiliza métodos jurídicos». Ya que el derecho canónico no se identifica con el derecho positivo, por perseguir metas diferentes, el Código de Derecho canónico ha de interpretarse y aplicarse en la óptica teológica. De hecho, el mencionado decreto *Novo Codice* centra de nuevo la enseñanza del Derecho canónico en su fuente teológica.

Por otra parte, el estudio científico del Derecho canónico exige un constante referirse a las fuentes normativas e históricas, así como a la jurisprudencia y a la praxis, con el deseo de ahondar en la comprensión y en la interpre-

tación de los Códigos «para aplicarlos a las situaciones concretas de las Iglesias particulares y de los fieles de Cristo».

El capítulo primero se centra más explícitamente en *El campo de aplicación del Código de 1983* (pp. 37-59), o sea los cánones preliminares del CIC de 1983, que evidencian algunos principios directores y la necesidad de referirse a toda la tradición canónica para una buena comprensión del Código de 1983, una buena interpretación y aplicación de las disposiciones jurídico-cánónicas promulgadas por el legislador universal.

La costumbre (cann. 23-28) corresponde al título II de las normas generales (pp. 61-76). Los elementos jurídicos-canónicos relativos a la costumbre se articulan alrededor del principio del canon 27, *consuetudo est optima legum interpretres*. Subraya el autor que la normativa sobre la costumbre recuerda el contexto cultural y sociológico de varias Iglesias en territorios de misión y concretamente de las Iglesias africanas. Estas se implantan y viven la fe en contextos marcados por las costumbres y las tradiciones. Los principios jurídicos y canónicos relativos a la costumbre «pueden ayudar a acompañar el caminar de dichas Iglesias ayudándoles a abrirse cada vez más a los valores de su costumbre con el fin de vivir una fe auténtica y de testimoniar un mensaje evangélico que se incultura y transforma las costumbres y tradiciones abriéndolas a la vitalidad evangélica».

El capítulo III estudia *Los decretos generales y las instrucciones* (pp. 77-88), sabiendo que «estos instrumentos jurídicos son eficaces e indispensables en la titularización de los derechos y de los deberes de los fieles así como en el ejercicio del poder ejecutivo y legislativo».

La parte segunda se centra en *Personas y actos*, nociones importantes que no se limiten a unos conceptos jurídicos, sino que son instituciones jurídico-cánónicas que capacitan la legislación canónica para responder a los siguientes interrogantes: ¿Quién es persona en la Iglesia? ¿Cuáles son los distintos tipos de personas y su estatuto jurídico en la Iglesia constituida y organizada en sociedad? ¿Cuál es el valor jurídico de los actos y cuáles son las condiciones requeridas para su validez?

Las respuestas han de encontrarse en los dos capítulos que componen esta parte segunda: *Las personas físicas y personas jurídicas* (cann. 96-123) (pp. 95-161) y *Los actos jurídicos* (cann. 124-128) (pp. 163-185). El primero de ellos, el capítulo IV, hace una lectura analítica de los cánones para sacar a la luz los elementos jurídicos y canónicos que rigen las personas físicas y jurídicas en la Iglesia. Al incorporar a ella, el bautismo confiere al fiel cristiano la personali-

dad o condición jurídica, sujeto de derechos y deberes (c. 96). Esto ayuda a comprender la noción de persona en la Iglesia. El autor presenta los factores que influyen sobre los derechos y deberes de las personas físicas, o sea la edad, el uso de razón, la determinación del territorio, la adquisición o la pérdida del domicilio o cuasidomicilio, así como la consanguinidad, la afinidad, la adopción, el rito y sus consecuencias jurídicas. Se hace particular hincapié en este capítulo en el proceso de los actos colegiales, a la par que se procede a una presentación panorámica de las personas jurídicas públicas y privadas.

El capítulo V permite distinguir entre validez e invalidez, licitud e ilicitud de los actos jurídicos. El estudio del canon 124 permite delimitar la noción y las condiciones de validez del acto jurídico. Los cánones 125-126 definen los vicios del acto jurídico, mientras que el canon 127 trata de la necesidad del parecer o del consentimiento.

La tercera parte y última se refiere al *Poder y los oficios*, objeto de los títulos VIII y IX del Libro I del CIC de 1983. Pero estas dos instituciones jurídico-canónicas están íntimamente vinculadas en su naturaleza y comprensión en la medida en que la una no existe sin la otra. Se da un vínculo estrecho entre poder de gobierno y oficio eclesiástico. Esta parte tercera apunta a dar una respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo entender el poder y su ejercicio en la Iglesia? ¿Cuáles son el marco y las modalidades de ejercicio del poder? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo definir los oficios y cuál es su importancia en la Iglesia constituida en sociedad y gobernada por el Romano Pontífice? Y, más en concreto, ¿cuál es la reglamentación relativa a los oficios eclesiásticos que parece que estructuran la institución Iglesia? Y, por ende, ¿cómo entender el ejercicio de los oficios en unión con el ejercicio del poder y la naturaleza de la Iglesia, Pueblo de Dios, comunión y Cuerpo místico de Cristo?

El capítulo VI trata así del *Poder de gobierno (cann. 129-144)* (pp. 194-246). Quiso el legislador sentar en estos cánones las distinciones y los principios jurídico-legislativos del ejercicio de la *potestas regiminis* entendida como servicio prestado al bien común y a la salvación de las almas. Mientras el CIC de 1917 hablaba de *iurisdictio*, el legislador de 1983 ha puesto el acento en la *potestas regiminis* que *etiam potestas iurisdictionis vocatur*. La expresión *potestas regiminis* permite evitar la confusión entre el poder de gobierno y el poder judicial. El CIC de 1983 acaba con el equívoco del Código pío-benedictino con su división del poder de jurisdicción en poder de fuero externo y de fuero interno.

En cuanto a la posibilidad de la cooperación de fieles laicos al ejercicio del poder de gobierno posibilitado por el canon 129 § 2, el autor subraya que «para cooperar al ejercicio del poder, hace falta haber recibido el poder antes de cooperar en ello o de participar en él». Por ello, algunos dan a la locución *cooperari possunt* el mismo significado que a *partem habere possunt*. Además, dicha cooperación ha de ser *ad normam iuris*. Esto no supone una limitación a la cooperación, sino más bien unas limitaciones al ejercicio de los derechos que pueden seguir al modo o a la condición jurídica o los estatutos de las personas jurídicas. En la práctica, la cooperación de los laicos ha de limitarse al poder delegado y a las facultades habituales.

Un mejor ejercicio del poder de gobierno, dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial, exige distinguir entre poder ordinario y delegado, entre fuero interno y externo, entre poder subdelegado y facultades con las consecuencias jurídicas que de ello derivan. El ejercicio del poder de gobierno ha de hacerse en el respeto más estricto de los principios jurídicos y canónicos y ello en estrecha relación con el poder de santificación y el poder de enseñanza, en la medida en que los *tria munera* están estrechamente vinculados entre sí. Recuerda el abbé Beugré que en la Iglesia el ejercicio del poder se concibe como un servicio «a favor del Pueblo de Dios y con la preocupación permanente de promover la caridad, la misericordia y la comunión eclesial».

Los oficios eclesiásticos (cann. 145-196), tema del capítulo VII (pp. 247-336), el más largo de todos, permite subrayar que la finalidad del ejercicio del oficio eclesiástico en vistas al bien espiritual muestra a las claras el cambio de perspectiva operado por el legislador para una mejor comprensión y buen ejercicio del oficio eclesiástico, de ahora en adelante desvinculado del sistema de los beneficios. Se trata de saber cómo el oficio ha de ejercerse en vistas al bien espiritual, a la salvación de las almas y al bien de la Iglesia. El legislador se inscribe en esta nueva lógica al formular las disposiciones del Código vigente en cuanto a la reglamentación y acompañamiento de la provisión, ejercicio y pérdida del oficio eclesiástico.

Con el fin de proteger la estabilidad del oficio, el Concilio Vaticano II ha proclamado la libertad de la Iglesia de nombrar, presentar y designar aquellos que están llamados a desempeñar unos oficios eclesiásticos, en especial el oficio de obispo. Además, en virtud del bautismo, cada fiel cristiano está llamado a obrar para anunciar el Evangelio asumiendo su vocación y su compromiso de seguir a Cristo según su condición propia (hubiera sido oportuno subrayar aquí que se trata de un derecho-deber fundamental de todo fiel).

Estas dos obras del P. Beugré cubren por tanto el conjunto de las normas generales del Código de 1983, con la salvedad de los últimos cánones sobre prescripción y cómputo del tiempo, sin que se sepa a qué se debe esa omisión.

Sin embargo, en la *Conclusión* (pp. 337-341), el autor destaca que la noción de tiempo «sugiere que es necesario dedicar tiempo a la iniciación al derecho y al estudio de la ciencia jurídico-canónica para un mejor ejercicio de poder de gobierno y una buena colaboración en los distintos cargos y funciones que la Iglesia confía a sus miembros». Y nota que algunas Iglesias particulares «padecen del no respeto de disposiciones jurídicas y pastorales en razón sea de una aplicación incorrecta de las normas sea de una negación del derecho de la Iglesia como instrumento eficaz e indispensable para el funcionamiento e influencia de una diócesis, sea por una ignorancia de los principios y procedimientos que rigen el ejercicio del poder de gobierno sea por una falta de personal cualificado».

Dominique LE TOURNEAU

Pierpaolo DAL CORSO, *Delicta graviora contro l'Eucaristia*, Marcianum Press, Venezia 2016, 399 pp., ISBN 978-88-6512-435-2

La publicación de una monografía de derecho penal canónico es, sin duda, una buena noticia. Ayuda a promover el estudio y a aplicar adecuadamente el sistema penal contenido en el Libro VI del CIC de 1983 y en otras normas complementarias. Al mismo tiempo es síntoma de la relevancia de este sector del derecho de la Iglesia.

Durante muchas décadas se ha ignorado casi por completo, tanto a nivel teórico como en la praxis, el derecho penal de la Iglesia. Se le ha llegado a considerar como algo incompatible con la naturaleza espiritual de la Iglesia, en total confrontación con la ley de la caridad, que estaría en la cúspide de la jerarquía «normativa» de la Iglesia. Un pastor debería renunciar a su ejercicio si quisiera ser fiel al evangelio. Este tipo de actitudes fueron calificadas por Benedicto XVI como una especie de ofuscación de la mente, en su carta a los católicos de Irlanda. La crisis de los abusos sexuales de menores, por parte de clérigos, y la respuesta operada por tantos obispos, muestran a las claras los efectos perniciosos de tal mentalidad.